

JOSEP FONTANA

EL FUTURO
ES UN PAÍS EXTRAÑO

Una reflexión sobre la crisis social
de comienzos del siglo XXI

PASADO & PRESENTE

PASADO & PRESENTE
BARCELONA

ÍNDICE

<i>Introducción</i>	7
1. LA CRISIS SOCIAL DE COMIENZOS DEL SIGLO XXI	21
1. LOS ESTADOS UNIDOS: MÁS ALLÁ DE LA RECUPERACIÓN	22
Recuperación ¿para qué y para quién?	23
La privatización de la política	30
Hacia la privatización del estado	42
El reflujó de las libertades democráticas	48
2. LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Y LA CRISIS EUROPEA	59
2. LAS CONSECUENCIAS GLOBALES DE LA CRISIS: UN MUNDO DE POBREZA Y CONFLICTO	75
El desigual progreso de África	79
El irresistible ascenso de Asia	86
América Latina	93
¿Qué se hizo de la «Primavera árabe»?	98

3. LAS PERSPECTIVAS DE LA PAZ Y DE LA GUERRA	107
Los viejos conflictos: las guerras de religión.	107
Irak	108
Afganistán	111
La guerra civil en Siria.	115
Un proyecto de guerra para el futuro: Irán.	118
Las nuevas guerras del siglo XXI.	120
Un nuevo estilo de guerra.	123
Los próximos escenarios del conflicto	128
4. ¿CRISIS DEL CAPITALISMO?	133
Las dudas acerca del capitalismo.	134
Resistencias y protestas	140
Las otras vías de protesta.	149
<i>Notas bibliográficas</i>	155
<i>Índice de nombres</i>	219

INTRODUCCIÓN

La visión de la historia en que nos hemos educado tiene sus fundamentos en unas ideas que datan de hace más de dos siglos, en unas concepciones que surgieron con la Ilustración. Una visión que sostiene que la evolución del ser humano está indisolublemente unida al progreso. La expresó Gibbon en 1781 en su *Historia de la decadencia y caída del Imperio romano*, donde sostenía que «cada edad del mundo ha aumentado, y sigue aumentando todavía, la riqueza real, la felicidad, el saber y tal vez la virtud de la especie humana». Y la confirmó en 1795 Condorcet, quien, en su *Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano*, afirmaba que la capacidad de perfección del hombre es indefinida y que sus progresos «podrán seguir una marcha más o menos rápida, pero que nunca será retrógrada».

Esta idea condujo a los historiadores a trazar el cuadro de la evolución de la humanidad como un ascenso sin interrupciones, desde la revolución neolítica que había visto nacer la agricultura y la civilización, hasta la revolución industrial, que había multiplicado nuestra capacidad de producción de bienes. En el terreno de los avances sociales, la conquista de las libertades individuales por la Revolución francesa vino seguida por la de los derechos sociales en los siglos XIX y XX. De este modo habíamos conseguido vivir en un mundo más libre, en que el nivel de vida de los ciudadanos avanzaba gradualmente.

Parecía lógico pensar que el futuro seguiría estas mismas pautas de progreso y libertad, una esperanza que tomó nueva fuerza en 1945, después de la victoria sobre el fascismo en la Segunda guerra mundial, cuando comenzaba a consolidarse el estado del bienestar y los dirigentes de los regímenes vencedores hacían públicas unas promesas de mejora indefinida.

En el terreno del crecimiento económico, sin embargo, han comenzado a surgir dudas acerca de esta continuidad del progreso. Algunos sostienen que durante la mayor parte de la historia humana el mundo experimentó tan solo un crecimiento mínimo, si es que lo hubo, y que «el rápido progreso alcanzado en los últimos 250 años puede haber sido un episodio único en la historia humana».

Pero es que, además, hay que examinar críticamente la relación que existe entre este «rápido progreso» y la evolución de la calidad de vida de los hombres y mujeres que lo han protagonizado. En algún modo es verdad que en los últimos doscientos cincuenta años hemos avanzado también en los terrenos de las libertades y del bienestar de la mayoría, pero este progreso no es, como pensábamos, el fruto de una regla interna de la evolución humana, sino el resultado de muchas luchas colectivas. Ni las libertades políticas ni las mejoras económicas se consiguieron por una concesión de los grupos dominantes, sino que se obtuvieron a costa de revueltas y revoluciones.

El crecimiento económico de Europa entre 1500 y 1850, por ejemplo, incluyendo en él la revolución industrial, lo habíamos integrado en nuestra visión de la historia como un paso adelante en el camino del progreso. Pero cuando de las cifras de producción pasábamos a la consideración de la suerte de los seres humanos, la imagen se transformaba en otra de retroceso. Durante muchos años nos habíamos basado en indicios diversos para analizar la evolución de los niveles de vida en la época de la industrialización, hasta que la historia antropométrica, que estudia la evolución de la estatura huma-

na a lo largo del tiempo, un dato estrechamente relacionado con los niveles de vida, nos ha revelado que desde comienzos del siglo XVI a fines del XVIII, hubo un claro retroceso en las zonas más avanzadas de Europa, incluidas Inglaterra y Holanda, lo que muestra que «hubo una relación inversa entre desarrollo y nivel de vida», y que «amplios sectores de la población de Europa no sacaron provecho del progreso económico que se estaba realizando». Un proceso que la industrialización prolongó en la Europa desarrollada por lo menos hasta mediados del siglo XIX.

Esta situación no cambió porque los gobiernos o las clases dominantes se ilustrasen y decidiesen hacer una política más generosa en materia de reparto de los beneficios del progreso tecnológico, sino como consecuencia de más de un siglo de luchas sociales protagonizadas por los trabajadores: de huelgas, protestas y revueltas que obligaron a pactos y concesiones, con el objeto de evitar que el orden social fuese subvertido por intentos revolucionarios como el de la *Commune* de París. Los terrores que habían engendrado estas revueltas fueron los que impulsaron a las clases propietarias, mediando el arbitraje de los gobiernos, a negociar mejoras con los trabajadores. De hecho, la mayoría de los avances sociales logrados en los siglos XIX y XX, desde la limitación de la jornada de trabajo o el salario mínimo hasta el sistema de pensiones, unos avances de los que no solo se beneficiaron los trabajadores sino el conjunto de la sociedad, se debieron a esta lucha: sin la fuerza negociadora de los sindicatos, nunca hubiera habido «estado del bienestar».

En 1917, además, se produjo un acontecimiento, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, que elevó estos terrores al máximo. Ello sucedía, además, en una sociedad europea conmocionada por la guerra más terrible que hasta entonces se hubiera conocido en la historia. Salvatore Quasimodo ha dicho que después de una guerra nada parece igual que antes.

Los hombres que se han enfrentado a la muerte regresan de las trincheras con una mente cambiada, que no acepta los viejos valores, y hay que hablarles en un nuevo lenguaje. Es, de hecho, la misma idea que sostenía Keynes, quien, a poco de concluida la guerra, afirmaba que el crecimiento capitalista se había basado hasta entonces en un engaño por el que «las clases trabajadoras aceptaban, por ignorancia o impotencia (...), una situación en que no podían llamar suya más que a una pequeña parte del pastel que ellos, la naturaleza y los capitalistas contribuían a producir. Y, en cambio, les era permitido a las clases capitalistas llevarse la mayor parte del pastel». Pero, añadía Keynes, la guerra había puesto al descubierto esta realidad y «las clases trabajadoras puede ser que no quieran seguir más tiempo en esta amplia renunciación».

Los gobiernos europeos no supieron responder a las expectativas de cambio social y de mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres que habían pagado el precio de muerte y sufrimiento de la guerra. Y se enfrentaron a estas demandas con una total incompreensión, considerando que eran un simple efecto del contagio soviético, y que lo único que había que hacer era utilizar la represión para liquidarlas.

Los años de aquella posguerra fueron de conmoción social en toda Europa: revuelta comunista en Alemania, huelga general en Inglaterra, ocupaciones de fábricas en Italia, revolución en Hungría, conmoción social en Viena «la roja», trienio bolchevique en los campos de Andalucía... De hecho, toda la historia del siglo XX, desde 1917 hasta los años setenta, estuvo condicionada por el gran miedo al comunismo, agravado al producirse la crisis económica de los años treinta, con sus secuelas de paro y hambre, que parecían anunciar la caducidad del capitalismo.

El gran miedo a la revolución inspiró, por una parte, soluciones autoritarias como las del fascismo italiano y el nazismo alemán (con imitaciones y secuelas en la mayor parte de Euro-

pa), que eran esencialmente fórmulas para combatir el comunismo, como lo muestra el hecho de que comenzasen suprimiendo los sindicatos que hasta entonces habían dirigido la actuación del movimiento obrero. Por otra parte, este mismo miedo dio también pie a políticas que querían mantener la versión liberal del proyecto de progreso social con la introducción de medidas reformistas, como las que F. D. Roosevelt planteó con el New Deal en los Estados Unidos, que continuarían vigentes después del fin de la guerra.

Nouriel Roubini ha explicado así la lógica del reformismo: «Antes incluso de la Gran depresión, las clases ilustradas de Europa reconocían que, con el fin de evitar revoluciones, les convenía proteger los derechos de los trabajadores, mejorar los salarios y las condiciones de trabajo y crear un estado del bienestar para redistribuir la riqueza y financiar bienes sociales —educación, sanidad y una red social de protección (...). El ascenso del estado del bienestar fue, por tanto, una respuesta (...) al temor a las revoluciones populares, al socialismo y al comunismo (...). Siguieron a ello tres décadas de relativa estabilidad económica y social, desde los últimos años cuarentas a los primeros setentas: un período en que la desigualdad se redujo considerablemente y los ingresos medios crecieron con rapidez».

El fin de la Segunda guerra mundial, en 1945, llevó en efecto a una época de grandes promesas de futuro. Los vencedores habían anunciado en plena guerra, en la «Carta del Atlántico», que construirían un mundo en que estaría garantizado «el derecho que tienen todos los pueblos a escoger la forma de gobierno bajo la cual desean vivir», a la vez que ofrecían una paz global que había de proporcionar «a todos los hombres de todos los países una existencia libre, sin miedo ni pobreza».

Y la verdad es que, por lo menos en el plano de las relaciones entre capital y trabajo, las cosas comenzaron bien en esta

«edad de oro del capitalismo» que se suele fechar entre 1948 y 1973, en buena medida porque persistía el miedo al comunismo, que parecía reforzado tras su victoria en la Segunda guerra mundial. Un miedo que fue el elemento inspirador de una política que prometía un futuro de avance continuado de la libertad y de la igualdad, lo cual convertía en injustificada toda propuesta revolucionaria, y que denunciaba como enemigo de este progreso pacífico al comunismo soviético, contra el cual había que armarse con bombas atómicas y misiles para resistir sus proyectos de conquistar el mundo, a la vez que debían vigilarse y reprimirse sus posibles aliados interiores, lo cual condujo a criminalizar a los sectores más avanzados del movimiento obrero y de la izquierda.

Los años que van de 1945 a 1975 vieron en los países desarrollados una época de conciliación social, en que un reparto más equitativo de las ganancias permitió mejorar la suerte de la mayoría. Los salarios crecían al mismo ritmo a que aumentaba la productividad, y con ellos lo hacía la demanda de bienes de consumo por parte de los trabajadores, lo que se convertía en un estímulo más para el aumento de la producción. Fue esta una situación que ha podido definirse como «una democracia de clase media» basada en «un contrato social no escrito entre el trabajo, los negocios y el gobierno». Un papel esencial en este contrato correspondía a los sindicatos, que no solo negociaban las condiciones de trabajo y los salarios de sus afiliados, sino que tuvieron un considerable papel en la política.

Esta evolución se invirtió a partir de los años setenta del siglo pasado, después de la crisis del petróleo, que sirvió de pretexto para iniciar el cambio. La primera consecuencia de la crisis fue que la producción industrial disminuyese en un diez por ciento y que millones de trabajadores quedasen en paro. Estos fueron años de conmociones sociales en que los sindicatos, movilizados en Europa en defensa de los derechos de los trabajadores, consiguieron retrasar por una década los cam-

bios que habían comenzado a producirse en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, donde los empresarios, bajo la tutela del presidente Ronald Reagan y de la señora Thatcher, decidieron que había llegado el momento de iniciar una política de lucha contra los sindicatos, de desguace del estado del bienestar y de limitación del papel de los gobiernos en el control de la economía.

Hacia 1975 parecía claro que el triunfo de la Unión Soviética en la guerra fría era imposible, y que no había que temer que el comunismo, tras las experiencias de París y de Praga en 1968, pudiese impulsar una revolución en los países desarrollados. Las clases propietarias podían dormir con tranquilidad, sin el temor a ninguno de los diversos fantasmas subversivos que habían perturbado su sueño desde los tiempos de la Revolución francesa. No era necesario seguir pactando: había llegado la hora de restablecer la plena autoridad del patrón, como en los primeros tiempos de la industrialización, cuando no había límites para las horas de trabajo exigidas, ni se negociaba por los salarios.

Así comenzó lo que Paul Krugman llama «la gran divergencia», el proceso por el cual se produjo el enriquecimiento gradual de los más ricos y el empobrecimiento de todos los demás, que sigue en plena vigencia en la actualidad. El resultado a largo plazo de este proceso se puede sintetizar en estas cifras referidas a los Estados Unidos: entre 1973 y 2011 la productividad creció en un 80,4 por ciento, mientras que el salario por hora trabajada solo lo hizo en un 10,7 por ciento. Es evidente que no existe ya el reparto equitativo de los aumentos de riqueza entre los empresarios y los trabajadores: que se ha acabado el pacto que había sido la base de la armonía social de los años de posguerra.

Joseph Stiglitz dijo en una entrevista: «Un trabajador a tiempo completo está peor hoy en los Estados Unidos que hace 44 años. Es sorprendente: medio siglo de estancamiento. El

sistema económico no funciona. No importa que unas pocas personas se beneficien escandalosamente en la cima; cuando la mayoría de los ciudadanos no mejora, el sistema económico no va bien». Se equivocaba, porque las normas por las que se rige el capitalismo no se encaminan a conseguir el bienestar general, sino el beneficio privado. El progreso económico ha sido compatible en el pasado con la plantación esclavista o con la explotación del trabajo de los niños en las fábricas, y sigue utilizando hoy el trabajo forzado allá donde se le permite. No fue el humanitarismo, sino el miedo a la revolución el que obligó a los empresarios a admitir limitaciones.

Esta «gran divergencia» que anunciaba el fin de una época de paz social no nació por causas económicas, por la dinámica de los mercados o por los avances de la tecnología, sino por causas políticas: por «la manipulación de las leyes y las reglas por obra de quienes podían pagar negociadores, legisladores y abogados para realizar sus encargos». Los empresarios lograron así el control de una política que se compra y se vende, y consiguieron bloquear las leyes que podrían obligarles a aumentar sus costes. No solo las que se refieren a los salarios y a los derechos de los trabajadores, sino también las que tienen que ver con el control de la polución o las que se dirigen a la previsión del cambio climático. Los políticos cumplen además su cometido encargándose de rebajar sistemáticamente los impuestos a las grandes fortunas, y toleran las argucias legales que los más ricos utilizan para no pagarlos.

Fueron los políticos directamente ligados a los intereses financieros los que consiguieron, durante la presidencia de Clinton, que se derogasen en los Estados Unidos las leyes que ponían freno a la especulación financiera, y llevaron de este modo la economía a la crisis de 2007-2008. Una crisis que no fue un accidente, sino la lógica y natural consecuencia de una política dedicada a favorecer exclusivamente los intereses de los más ricos y de las grandes empresas, incluyendo la permi-

sividad ante la especulación financiera, que llegó en muchas ocasiones a niveles delictivos, en condiciones en que, como dice Robert Scheer, se les había garantizado a los especuladores la impunidad, dada su capacidad de «modificar las leyes antes de cometer el crimen».

Las consecuencias de la crisis las sufrieron tan solo los de abajo: los bancos fueron recapitalizados con dinero público, mientras muchas familias perdían sus hogares por no poder seguir pagando las hipotecas, y el paro aumentó sin control. Las cuentas del estado sufrieron las consecuencias agregadas de los costes de sanear las empresas financieras y de los recortes de los impuestos a los más ricos, con el pretexto, infundado según la experiencia histórica, de favorecer que estos invirtieran y contribuyesen a reactivar la economía.¹

A lo que, en el caso de los Estados Unidos, se agregarían los enormes costes de la «guerra contra el terror», que se estiman en unos 690.000 millones de dólares en diez años, a los que hay que añadir los de las guerras de Irak (4 billones) y de Afganistán (todavía por contabilizar). Este despilfarro de recursos públicos se ha usado para legitimar una política de austeridad que insta a reducir el gasto público para limitar el déficit y liquidar la deuda, a costa del recorte de los servicios sociales, esto es, a costa del nivel de vida de los trabajadores y de las capas medias.

La irracionalidad de esta política en términos económicos ha resultado evidente, ante su incapacidad para crear puestos de trabajo y restablecer la actividad productiva, mientras, por otra parte, favorecía el mecanismo generador de desigualdad económica y control social. Con el tiempo se ha ido abriendo

1. Un estudio del Congressional Research Service llegó a la conclusión de que «hay poca evidencia en los últimos 65 años de que los recortes de impuestos a los que tienen mayores ingresos aparezcan asociados al crecimiento del ahorro, de la inversión o de la productividad».

paso la conciencia de que, si bien un cierto grado de desigualdad es propio del funcionamiento de una economía de mercado, su aumento exagerado tiene efectos negativos sobre el crecimiento. Pero ¿cómo traducir esto en un nuevo proyecto de redistribución, como el de los años que siguieron a la Segunda guerra mundial, cuando la política económica está, tanto en América como en Europa, en manos de los que defienden ante todo los intereses del «uno por ciento» de los más ricos?